VERSION PRELIMINAR
SUSCEPTIBLE DE CORRECCION
UNA VEZ CONFRONTADO
CON EL EXPEDIENTE ORIGINAL

(S-0199/2022)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

PROGRAMA DE RESPALDO A ESTUDIANTES DE ARGENTINA (PROGRESAR)

CAPITULO I

Disposiciones generales

ARTICULO 1.- Créase el “PROGRAMA DE RESPALDO A ESTUDIANTES DE ARGENTINA” (PROGRESAR) con el fin de generar nuevas oportunidades de inclusión social y laboral a las personas jóvenes en situación de vulnerabilidad a través de acciones integradas que permitan su capacitación e inserción laboral.

ARTICULO 2.-. El PROGRAMA DE RESPALDO A ESTUDIANTES DE ARGENTINA (PROGRESAR) estará destinado a las personas jóvenes que quieran terminar sus estudios obligatorios, realizar un curso de formación profesional o avanzar en sus estudios superiores.

ARTICULO 3.- El Poder Ejecutivo Nacional designará la Autoridad de Aplicación de las disposiciones de la presente Ley, quedando esta Autoridad facultada para el dictado de las normas interpretativas, aclaratorias y complementarias necesarias para su implementación.

ARTICULO 4.- Las personas jóvenes que quieran ingresar al Programa podrán hacerlo durante todo el año y deberán cumplir con las siguientes condiciones:

1. Para la finalización de la educación obligatoria
 - a) Acreditar identidad, mediante Documento Nacional de Identidad.
 - b) Ser argentina nativa, por opción, o residente con una residencia legal en el país no inferior a dos (2) años previos a la solicitud.
 - c) Tener entre dieciséis (16) y veinticuatro (24) años de edad al momento del cierre de la convocatoria a la beca.
 - d) Para el caso de grupos en condición de vulnerabilidad multidimensional, la edad se extiende hasta treinta (30) años cumplidos a la fecha del cierre de la convocatoria a la beca.

- e) Se extiende hasta 35 años de edad a las personas con hijas/os menores de 18 años pertenecientes a hogares monoparentales.
- f) Para personas travestis, transexuales, transgénero e intersex no se establece límite de edad.
- g) Para personas con discapacidad no se establece límite de edad.
- h) Para personas refugiadas no se establece límite de edad.
- i) Para personas integrantes de las comunidades indígenas y/o pertenecientes a pueblos originarios no se establece límite de edad.
- j) Para personas residentes en áreas rurales dispersas no se establece límite de edad.
- k) Ser alumna/o regular de una institución educativa pública o de gestión privada de cuota cero o el equivalente que establezca la Autoridad de Aplicación.
- l) La suma de los ingresos de la persona joven y los de su grupo familiar no debe ser superior a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

2. Para cursar educación universitaria o terciaria:

- a) Acreditar identidad, mediante Documento Nacional de Identidad.
- b) Ser argentina nativa o por opción o residente con una residencia legal en el país no inferior a CINCO (5) años previos a la solicitud para educación superior o a DOS (2) años para formación profesional.
- c) Tener al momento del cierre de la convocatoria, en el caso de jóvenes ingresantes, entre diecisiete (17) y veinticuatro (24) años de edad cumplidos.
- d) Para el caso de personas estudiantes avanzadas en la carrera (al menos 50% de la currícula aprobada), el límite de edad se extiende hasta treinta (30) años cumplidos.
- e) Se extiende hasta 35 años de edad a las personas con hijas/os menores de 18 años pertenecientes a hogares monoparentales.
- f) Para el caso de grupos en condición de vulnerabilidad multidimensional, tanto ingresantes como avanzados, la edad se extiende hasta treinta y cinco (35) años

- g) Para personas travestis, transexuales, transgénero e intersex no se establecen límite de edad.
- h) Para personas con discapacidad no se establece límite de edad.
- i) Para personas refugiadas no se establece límite de edad.
- j) Para personas integrantes de las comunidades indígenas y/o pertenecientes a pueblos originarios no se establece límite de edad.
- k) Para personas residentes en áreas rurales dispersas no se establece límite de edad.
- l) La suma de los ingresos de la persona joven y los de su grupo familiar no debe ser superior a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM)
- m) Haber egresado del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción.
- n) Ser alumno/a regular de una institución educativa pública o de gestión privada que emita títulos oficiales, brinde un servicio gratuito o contribución voluntaria y esté localizada en una zona donde no exista oferta semejante en las instituciones educativas de gestión estatal o el equivalente que establezca la Autoridad de Aplicación.
- ñ) Cumplir con los requisitos académicos establecidos.

3. Para formación profesional

- a) Acreditar identidad, mediante Documento Nacional de Identidad.
- b) Ser argentina/o nativa/o; naturalizada/o o extranjera/o, con residencia legal de dos (2) años en el país.
- c) Tener entre 18 y 24 años cumplidos.
- d) Se extiende hasta 35 años de edad a las personas con hijas/os menores de 18 años pertenecientes a hogares monoparentales y hasta 40 años para personas que no poseen trabajo formal registrado.
- e) Para el caso de grupos en condición de vulnerabilidad multidimensional, tanto ingresantes como avanzados, la edad se extiende hasta treinta y cinco (35) años

- f) Para personas travestis, transexuales, transgénero e intersex no se establecen límite de edad.
- g) Para personas integrantes de las comunidades indígenas y/o pertenecientes a pueblos originarios no se establece límite de edad.
- h) Para personas refugiadas no se establece límite de edad.
- i) La suma de los ingresos de la persona joven no debe ser superior a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

4. Para estudios de enfermería

- a) Acreditar identidad, mediante Documento Nacional de Identidad.
- b) Ser argentino/a nativo/a o naturalizado/a o extranjero/a, con residencia legal de cinco (5) años de en el país.
- c) Ser mayor de 17 años al cierre de la convocatoria respectiva, sin límite de edad.
- d) Para el caso de personas estudiantes avanzadas en la carrera (al menos 50% de la currícula aprobada), el límite de edad se extiende hasta treinta (30) años cumplidos.
- e) Se extiende hasta 35 años de edad a las personas con hijas/os menores de 18 años pertenecientes a hogares monoparentales.
- f) Para el caso de grupos en condición de vulnerabilidad multidimensional, tanto ingresantes como avanzados, la edad se extiende hasta treinta y cinco (35) años
- g) Para personas travestis, transexuales, transgénero e intersex no se establecen límite de edad.
- h) Para personas integrantes de las comunidades indígenas y/o pertenecientes a pueblos originarios no se establece límite de edad.
- i) Para personas refugiadas no se establece límite de edad.
- j) La suma de los ingresos de la persona joven y los de su grupo familiar no debe ser superior a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

- k) Ser egresado/a del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción.
- l) Cursar o ingresar a cursar sus estudios en Institutos de Educación Técnica Superior de Gestión Estatal. Excepcionalmente, los Institutos de Educación Técnica Superior de Gestión Privada inscriptas en el PRONAFE.

En todos los casos la Autoridad de Aplicación podrá verificar la asistencia efectiva a los establecimientos educativos o centros de formación profesional por parte de las personas beneficiarias.

ARTICULO 5.- El grupo familiar de la persona solicitante está constituido por padres, madres o tutores responsables, salvo que la persona joven haya contraído matrimonio o se encuentre en unión convivencial, en cuyo caso se considerará al cónyuge o conviviente.

ARTICULO 6.- Para estimar que la suma de los ingresos de la persona joven y los de su grupo familiar no superen los tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) se considerarán los siguientes ingresos:

- a) Las remuneraciones brutas de las personas trabajadoras en relación de dependencia registradas;
- b) La asignación Familiar por Maternidad o Maternidad Down, con exclusión de las horas extras;
- c) El plus por zona desfavorable y el sueldo anual complementario;
- d) Las rentas de referencia de las personas trabajadoras, autónomas y monotributistas;
- e) Los haberes de jubilación y pensión, al monto de la prestación por desempleo y las sumas brutas originadas en Prestaciones Contributivas o No contributivas, de cualquier índole.

ARTICULO 7.- Las personas beneficiarias que acrediten tener a su cargo, de manera única o compartida, el cuidado de personas menores de trece (13) años; personas con discapacidad o personas adultas mayores con las que convivan y requieran asistencia específica, podrán solicitar el acceso a los servicios de cuidados de gestión estatal vigentes o los equivalentes que aquella establezca, así como la extensión del límite de edad para su permanencia en el Programa.

ARTICULO 8.- El monto a pagar a las personas beneficiarias consistirá en una suma de dinero determinada no contributiva y mensual, según establezca la Autoridad de Aplicación en la convocatoria

correspondiente. El mismo no deberá ser inferior al otorgado durante el último mes de la convocatoria anterior.

El monto de las cuotas será actualizado de forma trimestral según lo establecido en el artículo 32 de la ley 24.241 y sus modificatorias.

El beneficio no podrá superar las DOCE (12) cuotas mensuales en la primera convocatoria del año y no podrá superar las SEIS (6) cuotas mensuales en la segunda convocatoria del año.

ARTICULO 9.- A las personas beneficiarias que cumplan con las condiciones de ingreso y los demás requisitos académicos establecidos por la Autoridad de Aplicación, se les liquidará una suma igual al OCHENTA POR CIENTO (80%) según lo previsto en el artículo 8°.

El VEINTE POR CIENTO (20%) restante será abonado una vez que se acredite la asistencia a la institución educativa en el mes de diciembre y demás requisitos académicos que establezca la Autoridad de Aplicación.

La falta de presentación de la documentación o el incumplimiento de alguna de las condiciones académicas a las que se refiere el artículo 4° producirá la pérdida del derecho al cobro del VEINTE POR CIENTO (20%) reservado y la suspensión de la posibilidad de aplicar al PROGRAMA DE RESPALDO A ESTUDIANTES DE ARGENTINA (PROGRESAR) por el plazo de UN (1) año.

A las personas beneficiarias que se encuentren en un estadio avanzado de su educación superior (50% de la currícula aprobada), se les liquidará una suma igual al CIEN POR CIENTO (100%) según lo previsto en el artículo 8°.

ARTICULO 10.- Quedan excluidas de la posibilidad de obtención de una beca Progresar las personas que se encontraren en alguna de las siguientes situaciones:

Para la finalización de la educación obligatoria y formación profesional

- a) Hubiera finalizado una carrera de grado, profesorado o tecnicatura.
- b) Se encontrare suspendida o se hubiera declarado el cese de una beca del Programa por causal que le fuera imputable.
- c) Recibiera u obtuviera otra beca de estudios por parte del Estado, Institución u Organización Pública o Privada, con o sin fines de lucro, entendiéndose por tales a cualquier sistema de transferencias dinerarias directas.

- d) Se encontrare la persona aspirante a obtener la beca o cualquier integrante de su grupo familiar inscripta en el Régimen de Impuesto a las Ganancias.
- e) Disponer de ingresos, por parte del o de la titular y de su grupo familiar, en concepto de remuneraciones de las personas trabajadores en relación de dependencia en los términos del artículo 4 de la Ley N° 24.714 y sus modificatorias, las rentas de referencia para las personas trabajadoras autónomas y monotributistas, los ingresos informales, las sumas originadas en Prestaciones Contributivas y/o No Contributivas Nacionales, Provinciales, Municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo las prestaciones previstas en las Leyes Nros. 24.013, 24.241, 24.557, 25.191, en el artículo 11 de la 24.714 y sus respectivas modificatorias y complementarias; cuya suma sea superior al tope establecido en el artículo 2. Las asignaciones previstas en el Régimen de Asignaciones Familiares, Ley N° 24.714, quedan excluidas de la suma del ingreso del grupo familiar, a excepción de la Asignación por Maternidad.
- f) No cumpliere con las demás condiciones establecidas en la presente Ley.

Para educación universitaria o terciaria y enfermería

- a) Hubiera finalizado una carrera de grado, profesorado o tecnicatura.
- b) Se encontrare suspendida o se hubiera declarado el cese de una beca del Programa por causal que le fuera imputable.
- c) Recibiera u obtuviera otra beca de estudios por parte del Estado, Institución u Organización Pública o Privada, con o sin fines de lucro, entendiéndose por tales a cualquier sistema de transferencias dinerarias directas.
- d) Estuviera excedida cuatro (4) años o más en el tiempo de duración de la carrera, según el correspondiente plan de estudios.
- e) Le restare para la finalización de la carrera cursar dos (2) o menos materias al momento de la primera (1°) inscripción al Programa y, menos de dos (2) materias para el caso de las personas becarias que hubieran sido beneficiadas con anterioridad por el Programa.
- f) Si adeudare sólo exámenes finales y/o la realización de tesis o prácticas profesionales.

- g) Si hubiera obtenido la beca durante el año anterior al de la convocatoria en curso hubiese cambiado de carrera, deberá esperar como mínimo un año calendario para solicitar nuevamente una beca Progresar, siempre y cuando continúe cumpliendo los requisitos establecidos en la normativa aplicable vigente.
- h) Se encontrare la persona aspirante a obtener la beca o cualquier integrante de su grupo familiar inscripta en el Régimen de Impuesto a las Ganancias.
- i) Disponer de ingresos, por parte del o de la titular y de su grupo familiar, en concepto de remuneraciones de las personas trabajadoras en relación de dependencia en los términos del artículo 4 de la Ley N° 24.714 y sus modificatorias, las rentas de referencia para las personas trabajadoras autónomas y monotributistas, los ingresos informales, las sumas originadas en Prestaciones Contributivas y/o No Contributivas Nacionales, Provinciales, Municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo las prestaciones previstas en las Leyes Nros. 24.013, 24.241, 24.557, 25.191, en el artículo 11 de la 24.714 y sus respectivas modificatorias y complementarias; cuya suma sea superior al tope establecido en el artículo 2°. Las asignaciones previstas en el Régimen de Asignaciones Familiares, Ley N° 24.714, quedan excluidas de la suma del ingreso del grupo familiar, a excepción de la Asignación por Maternidad.
- j) No cumpliera con las demás condiciones establecidas en la presente Ley.

ARTICULO 11. La beca oportunamente otorgada puede cesar cuando se presenten los siguientes casos:

- a) Por el vencimiento de la beca otorgada.
- b) Por muerte de la persona beneficiaria.
- c) Por renuncia de la persona beneficiaria.
- d) Por modificación de alguna de las causas que justificaron su otorgamiento.
- e) Por conclusión del curso o taller para el que se postuló inicialmente.
- f) Por abandono de los estudios.
- g) Por pérdida de la condición de alumno/a regular.

- h) Si habiendo sido adjudicada la beca durante el año de la convocatoria, no la hubiera cobrado por un período de noventa (90) días consecutivos.
- i) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en la presente Ley.
- j) Por falsear u omitir información en los procesos de selección o una vez otorgada la beca.

La persona que incurra en las causales identificadas como f, g e i no podrá volver a inscribirse en Progresar durante el plazo de un año calendario. Para el caso que incurriera en la causal j, esta se considera grave, y no podrá volver a inscribirse en Progresar.

ARTICULO 12. La situación de las personas jóvenes será evaluada individualmente en los siguientes casos:

- 1- Cuando la persona joven no cuente con grupo familiar.
- 2.- Cuando la persona joven tenga hijos/as a su cargo y sea soltera, se encuentre separada, o sea divorciada.
- 3.- Cuando la persona joven y/o algún/a integrante de su grupo familiar desarrolle tareas dentro del marco del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares (Ley N° 26.844).
- 4- Cuando la persona solicitante se postule para cursos de formación profesional

ARTICULO 13.- Facúltese a la Autoridad de Aplicación para definir qué sectores integran los grupos en condición de vulnerabilidad multidimensional a los que se le extenderá la edad límite de ingreso al Programa, entendiendo como tales a aquellos grupos que sufren exclusión y/o violencia; así como para incorporar otras situaciones que pudieran ser consideradas como causales de exclusión o cesación, no establecidas en los artículos 10 y 11.

ARTICULO 14.- Para las personas beneficiarias que continúen cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 4 y no presenten causales para su exclusión o cesación, según artículos 10 y 11, la renovación de la inscripción al Programa será automática hasta la finalización del nivel de estudios que se encuentren cursando.

ARTICULO 15.- El Poder Ejecutivo nacional arbitrará las medidas necesarias para que todas las personas beneficiarias del Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (PROGRESAR) puedan acceder

a una cuenta bancaria donde se depositará el monto previsto en el artículo 8.

ARTICULO 16.- Facúltese a la Autoridad de Aplicación a establecer convenios y acuerdos de colaboración con otras dependencias públicas con el objetivo de disponer de datos para realizar los cruces de información y cualquier otra gestión operativa que resulten necesarios a los fines de liquidar y poner al pago el presente Programa.

CAPITULO II

Sistema de Tutores y Tutoras de Acompañamiento

ARTICULO 17.- Créase el SISTEMA DE TUTORES Y TUTORAS DE ACOMPAÑAMIENTO A LA TRAYECTORIA EDUCATIVA del Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (PROGRESAR), el cual tendrá como objetivo principal brindar asistencia para que las personas beneficiarias que concurren al nivel obligatorio puedan culminar sus estudios y definir su futuro laboral y/o académico.

ARTICULO 18.- El Sistema se encontrará conformado por un equipo multidisciplinario cuyo accionar deberá tener alcance nacional, una interacción permanente con las jurisdicciones provinciales, organismos públicos, organizaciones sociales e instituciones educativas nacionales, provinciales y municipales y cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Ser docente de educación secundaria, educación superior y/o educación rural pública y/o privada de la República Argentina.
- b) Ser profesional o estudiante avanzado (con más del 80% de la currícula cursada y aprobada) de las siguientes carreras: Ciencias de la Educación, Psicología, Trabajo Social, Sociología, Psicopedagogía, Relaciones de Trabajo y/o afines, de acuerdo a lo que se establezca en la correspondiente reglamentación.

ARTICULO 19.- La distribución de las tutoras y tutores en todo el territorio nacional será proporcional a la cantidad de becas entregadas en cada provincia.

ARTICULO 20.- Facúltese a la Autoridad de Aplicación a establecer el reglamento de funcionamiento interno del Sistema y la modalidad de inscripción, selección, contratación y evaluación de las y los tutores que integran el mismo.

CAPITULO III

Comité Consultivo Federal

ARTICULO 21.- Créase el COMITE CONSULTIVO FEDERAL del PROGRAMA DE RESPALDO A ESTUDIANTES DE ARGENTINA (PROGRESAR), el cual tendrá como objetivo principal articular las distintas acciones en torno a la ejecución del Programa y las políticas vigentes en la materia, incluyendo la definición de prioridades en la asignación de las becas para estudios superiores o formación profesional en cada provincia o Región, tomando como referencia las particularidades educativas, laborales y productivas de cada una de ellas.

ARTICULO 22.- El COMITÉ CONSULTIVO FEDERAL se encontrará conformado por una persona representante de cada uno de los siguientes organismos y jurisdicciones: MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN, que presidirá el Comité; MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO; MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL; CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN; MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN; ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES); MINISTERIO DE ECONOMÍA; MINISTERIO DE LAS MUJERES GÉNEROS Y DIVERSIDAD; el/la Presidente/a de la Comisión de Educación y Cultura de la HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN; el/la Presidente/a de la Comisión de Educación de la HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN; y de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, garantizando la equidad en la representación de los géneros.

Los miembros del Comité se desempeñarán en sus funciones ad-honorem.

ARTICULO 23.- El Comité determinará su propio reglamento interno de funcionamiento y agenda de reuniones, las cuales deberán desarrollarse de manera rotativa en las SEIS (6) regiones del país: NOA (Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán), NEA (Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa y Misiones), Pampeana (Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y Santa Fé), Cuyo (Mendoza, San Juan y San Luis), Patagonia (Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur) y AMBA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires).

CAPITULO IV

Fondo Fiduciario Progresar

ARTICULO 24.- Constitúyese el FONDO FIDUCIARIO PÚBLICO denominado “FONDO FIDUCIARIO PROGRESAR”, el que se conformará como un fideicomiso de administración y financiero, cuyo objetivo será financiar líneas de acción orientadas a complementar y

potenciar las acciones vigentes del "PROGRAMA DE RESPALDO A ESTUDIANTES ARGENTINOS" (PROGRESAR).

ARTICULO 25.- A los efectos de la presente ley, los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se indica:

- a) Fiduciante: El ESTADO NACIONAL, a través de la Autoridad de Aplicación del "PROGRAMA DE RESPALDO A ESTUDIANTES ARGENTINOS" (PROGRESAR), en cuanto transfiere la propiedad fiduciaria de los bienes fideicomitidos al fiduciario con destino exclusivo e irrevocable al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7, inciso 3 de la Ley N° 27.605 y en el contrato de fideicomiso respectivo;
- b) Fiduciario: La entidad seleccionada por el COMITÉ EJECUTIVO, que actuará como administradora de los bienes que se transfieren en fideicomiso con el destino exclusivo e irrevocable que se establece en la presente ley, y cuya función será administrar los recursos del fideicomiso, de conformidad con las pautas a establecer en el contrato de fideicomiso y con las instrucciones impartidas por el referido COMITÉ EJECUTIVO del fideicomiso;
- c) Fideicomisario: el ESTADO NACIONAL, a través de la Autoridad de Aplicación del "PROGRAMA DE RESPALDO A ESTUDIANTES ARGENTINOS" (PROGRESAR), y propietario final de los bienes fideicomitidos al vencimiento del fideicomiso.
- d) Beneficiario: El ESTADO NACIONAL, a través de la Autoridad de Aplicación.

ARTICULO 26.- El FONDO FIDUCIARIO PÚBLICO tendrá una duración de VEINTE (20) años, contados desde la fecha de su constitución mediante la celebración del correspondiente contrato de fideicomiso, y a su vencimiento la propiedad de los bienes fideicomitidos quedará en poder del fideicomisario.

ARTICULO 27.- El COMITÉ EJECUTIVO estará integrado por el/la titular de la Autoridad de Aplicación, el/la titular de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), un/a representante del FONDO DE GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y un/a representante del área administrativa de la Autoridad de Aplicación.

La presidencia y vicepresidencia del Comité serán ejercidas de manera rotativa por períodos semestrales, alternando dichas funciones entre

el/la titular de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) y el/la titular de la Autoridad de Aplicación.

La presidencia del primer período será ejercida por el/la titular de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES).

Las decisiones se tomarán por mayoría simple. En caso de empate el voto de quien se encuentre en ejercicio de la Presidencia tendrá valor doble.

Los y las representantes de las dependencias públicas mencionadas en el presente artículo desempeñarán sus funciones con carácter "ad-honorem".

El COMITÉ EJECUTIVO será el encargado de fijar las condiciones, impartir instrucciones y/o autorizar en forma previa las actividades a cargo del fiduciario y efectuar su seguimiento, así como de definir las líneas de acción a implementar de acuerdo a lo establecido en el artículo 24 de la presente ley.

ARTICULO 28.- El patrimonio del FONDO FIDUCIARIO PROGRESAR estará constituido por los bienes fideicomitidos, que en ningún caso constituyen ni serán considerados como recursos presupuestarios o de cualquier otra naturaleza que ponga en riesgo el cumplimiento del fin al que están afectados, ni el modo u oportunidad en que se realice.

Dichos bienes son los siguientes:

- a) Los fondos asignados al PROGRESAR en el artículo 7, inciso 3 de la Ley N° 27.605;
- b) El producido de sus operaciones, la renta, frutos e inversión de los bienes fideicomitidos;
- c) Los ingresos provenientes de otros empréstitos que se contraigan, pudiendo garantizarlos con bienes del FONDO FIDUCIARIO PROGRESAR;
- d) Otros recursos provenientes del Tesoro Nacional que sean específicamente destinados al FONDO FIDUCIARIO PROGRESAR;
- e) Otros aportes, contribuciones, subsidios, legados o donaciones específicamente destinados al FONDO FIDUCIARIO PROGRESAR.

ARTICULO 29.- Los bienes fideicomitidos se destinarán al diseño, implementación, seguimiento y evaluación de resultados de las líneas de acción definidas por el COMITÉ EJECUTIVO, las cuales estarán orientadas a complementar y potenciar las acciones vigentes del PROGRESAR.

ARTICULO 30.- Establécese, para los hechos imponible que se perfeccionen a partir de de la presente ley, una exención en el Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias, previsto por la Ley N° 25.413 y sus modificaciones, para los créditos y débitos en cuentas utilizadas por el Fondo Fiduciario Público denominado “FONDO FIDUCIARIO PROGRESAR”, y por su fiduciario, en sus operaciones relativas al fondo.

Asimismo, conforme el principio de inmunidad fiscal del Estado, el FONDO FIDUCIARIO PROGRESAR y el FIDUCIARIO, en sus operaciones relativas a dicho FONDO, se encuentran exentos de todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales existentes y a crearse a futuro. Esta exención contempla los impuestos establecidos en la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y en la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019, y sus respectivas modificaciones, y otros impuestos internos que pudieran corresponder.

Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a eximir de todos los tributos aplicables en sus jurisdicciones en iguales términos a los establecidos en el párrafo anterior.

ARTICULO 31.- El COMITÉ EJECUTIVO dictará su propio reglamento interno de funcionamiento dentro de los NOVENTA (90) días de la entrada en vigencia de la presente ley y queda facultado para el dictado de actos aclaratorios y complementarios que resulten necesarios para la implementación del FONDO FIDUCIARIO PÚBLICO; y, asimismo, designará a su miembro integrante que suscribirá el Contrato de Fideicomiso con el Fiduciario.

CAPITULO V

Disposiciones complementarias

ARTICULO 32.- La Autoridad de Aplicación deberá establecer un protocolo para la difusión del PROGRAMA DE RESPALDO A ESTUDIANTES DE ARGENTINA (PROGRESAR) en medios de comunicación de alcance nacional, incluyendo la descripción de sus características, los requisitos necesarios para acceder, las fechas de inscripción y los canales o medios de contacto habilitados para tal fin, con el objeto de garantizar que las personas en condiciones de acceder al beneficio, según el artículo 4º de la presente ley, dispongan de la información necesaria para ingresar al Programa.

ARTICULO 33.- La Autoridad de Aplicación deberá elaborar y difundir un informe anual que contenga, como mínimo, la siguiente información:

1. Objetivos y alcance del Programa
2. Requisitos para ingresar al Programa establecidos por la Autoridad de Aplicación para los grupos en condición de vulnerabilidad multidimensional, conforme los artículos 4° y 12°, desagregando según nivel de estudios solicitado y especificando excepciones vigentes para grupos con vulnerabilidades multidimensionales.
3. Cantidad de personas inscriptas durante todo el año, según provincia, edad, género, tipo de institución (pública o privada), nivel de estudios y carrera de grado para la cual se solicitó el beneficio.
4. Cantidad de personas que efectivamente obtuvieron la beca durante todo el año, desagregando según provincia, edad, género, tipo de institución (pública o privada), nivel de estudios y carrera de grado para la cual se solicitó el beneficio.
5. Cantidad de personas beneficiarias pertenecientes a grupos con vulnerabilidades multidimensionales definidos oportunamente por la Autoridad de Aplicación.
6. Monto de las cuotas abonadas a las personas beneficiarias durante cada mes del año, desagregando según nivel de estudios que se encuentren cursando.
7. Presupuesto total destinado por la Autoridad de Aplicación para el funcionamiento del Programa durante todo el año.
8. Indicadores educativos que la Autoridad de Aplicación considere pertinentes para evaluar el impacto del Programa, desagregándolos según provincia, edad, género, tipo de institución (pública o privada), nivel de estudios y carrera de grado para la cual se solicitó el beneficio.

El informe anual que elabore la Autoridad de Aplicación será de acceso público y gratuito, deberá estar disponible en el sitio web oficial del Programa y ser remitido a las Comisiones de Educación del Congreso Nacional.

ARTICULO 34.- Facúltese a la Autoridad de Aplicación a realizar convenios con otras dependencias públicas y privadas con el objetivo de ampliar los beneficios que reciben las personas que perciben la beca.

ARTICULO 35.- El Programa se financiará con las partidas que anualmente asigne la Ley de Presupuesto con fondos provenientes del Tesoro Nacional y los recursos disponibles en el Fondo Fiduciario Progresar.

ARTICULO 36.- El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los 90 (noventa) días de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTICULO 37.- Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.

ARTICULO 38.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

María E. Catalfamo.- Anabel Fernández Sagasti.- Sergio N. Leavy.- Claudia Ledesma Abdala de Zamora.- Matías D. Rodríguez.- José R. Uñac.- Silvia Sapag.- Ana M. Ianni.- María E. Duré.- María T. M. González.- Cristina López Valverde.- Nora del Valle Giménez.- María I. Pilatti Vergara.- Juliana Di Tullio.- Sandra M. Mendoza.

FUNDAMENTOS

Señora Presidenta,

El acceso a la educación constituye uno de los factores determinantes para cualquier Nación que no solo procure el desarrollo de sus potencialidades productivas, sino principalmente la igualdad de oportunidades para sus habitantes. Resulta tan cierto que el desarrollo de un país requiere de mayores niveles de conocimiento y saberes educativos, como que el mismo solo puede darse en un contexto en que toda la ciudadanía tenga garantizado el acceso equitativo a los beneficios que acarrearán estos mayores niveles de formación y capacitación.

De nada sirve proyectar un modelo de país cuando en su seno no se garantiza que todas las personas dispongan de las mismas posibilidades para ingresar al sistema educativo, mantenerse en él, recibir la misma formación y obtener iguales beneficios de lo aprendido. Las inequidades que se producen cuando se generan desequilibrios en el acceso a la educación marcan a fuego la trayectoria personal de sus habitantes y, como contracara de la misma moneda, se condiciona también el destino de una Nación.

En el Siglo XXI, aquellos países que no logran elevar el nivel educativo de su sociedad quedan relegados en la carrera por posicionarse dentro de la nueva división internacional del trabajo. Aquellos que adolecen de esta asignatura y que, como corolario, lo hacen generando mayores desigualdades en su interior, están condenados a dilapidar décadas de

desarrollo, transitando un permanente círculo vicioso de fragmentación y segmentación social.

La Argentina no se encuentra exenta de estos desafíos. Pese a que históricamente, gracias a las conquistas sociales obtenidas por diversas generaciones, nuestro país ha sido ejemplo en el desarrollo de un sistema educativo público y gratuito, aún persisten barreras que le impiden a vastos sectores de la población acceder y permanecer en el mismo.

Al respecto, los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) dan cuenta de que en la Argentina tan solo uno de cada tres habitantes mayores de 18 años ha transitado en su vida por una institución de educación superior (terciaria o universitaria). Si nos concentramos exclusivamente en los que efectivamente finalizaron estos estudios, constatamos que solo el 21% de la población mayor de 25 años en nuestro país posee un título superior.

Debe tenerse en cuenta que la EPH solo refleja la situación de 31 conglomerados urbanos, motivo por el cual es probable que si estos datos se expandieran al total de la población del país dicho porcentaje sería aún menor. El dato más actualizado al respecto es el del Censo del año 2010 e indica que solo el 14% de las personas argentinas mayores a 25 años posee un título universitario o terciario.

En otras palabras, pese al incremento de la oferta universitaria, generada por la apertura de universidades nacionales y provinciales ocurrida durante las últimas décadas (solo durante el período 2003-2014 se fundaron quince nuevas universidades públicas) y pese a que la gran mayoría de ellas son públicas y gratuitas, ocho de cada diez argentinos y argentinas no pueden obtener un título superior que les permita desarrollar una carrera académica y profesional, limitando seriamente sus posibilidades de acceso al mundo del trabajo y a mejores condiciones de vida.

Debe señalarse que en nuestro país el proceso embrionario de deserción u abandono de los estudios se gestan con antelación a la etapa universitaria. Distintas investigaciones que se han desarrollado recientemente en la Argentina han comprobado que durante los primeros años de la secundaria se comienzan a producir los mayores índices de repitencia, los cuales constituyen la antesala de un sinuoso camino de alejamiento de los y las alumnos del sistema educativo. En tal sentido, el pasaje entre el 8vo y 9no año es el momento en que más alumnos y alumnas repiten o desertan en la educación secundaria (El “Estado de la Educación Argentina”, Observatorio Argentinos por la Educación, 2019 <https://n9.cl/lsvfa>).

En este marco, pese a la obligatoriedad de cursar los estudios secundarios (establecida por la Ley N° 26.206 del año 2006) y los innegables logros que han tenido las condicionalidades educativas impuestas por la Asignación Universal por Hijo (AUH) para incrementar la matrícula en este ciclo, persisten limitaciones estructurales que conllevan a que aún suframos altas tasas de repitencia y deserción escolar entre las y los adolescentes.

Las estadísticas son contundentes al respecto. En la Argentina, de cada diez personas estudiantes que comienzan el nivel secundario, cuatro no llegan a terminarlo en el plazo estipulado. Si bien se trata de guarismos preocupantes, se constata una mejoría respecto a indicadores relevados anteriormente. En tal sentido, la investigación realizada por el Ministerio de Educación de la Nación en 2015 permite observar que solo el 43% de los y las estudiantes de nuestro país concluían sus estudios secundarios en el plazo correspondiente (“La obligatoriedad del nivel secundario Una mirada en base a un abordaje cuantitativo” Boletín Temas de Educación N°11, Ministerio de Educación de la Nación, 2015 <https://n9.cl/kxcko>).

Cuatro años después (septiembre de 2019), con una metodología similar, el Observatorio Argentinos por la Educación, constató que en la cohorte 2012-2017 dicho porcentaje de alumnos y alumnas que terminaban sus estudios secundarios alcanzaba un 60%. La información relevada la EPH confirma estos mismos datos, permitiendo observar que entre la población mayor de 18 años solo 6 de cada 10 concluye el ciclo secundario.

Los datos mencionados anteriormente dan cuenta del proceso progresivo de deserción que existe en el sistema educativo argentino, donde de 10 personas que ingresan al sistema en la primaria, solo 6 terminan el secundario, 3 inician estudios universitarios y finalmente solo 2 obtienen un título superior.

De forma similar a lo que ocurre en todos los países en desarrollo, este proceso de abandono de la carrera educativa tiende acentuarse entre la población con mayores vulnerabilidades. Las razones que dan cuenta de este fenómeno son múltiples, incluyendo las dificultades para sortear barreras culturales, el desinterés o desconocimiento de las posibilidades que ofrece la educación, falta de contención familiar, ausencia de motivación, carencia de proyectos de vida a largo plazo, ingreso temprano al mundo del trabajo, maternidad/paternidad precoz, etc.

Sin embargo, más allá de cuál de estos factores tenga mayor relevancia en cada etapa histórica, los resultados para estos grupos vulnerables son siempre los mismos: la reproducción de un ciclo de inequidades en el acceso y permanencia en el sistema educativo, su correlato en la

persistencia de limitaciones en el ingreso al mundo del trabajo (empleos precarios o mal remunerados) y la imposibilidad de romper las condiciones estructurales de desigualdad, exclusión y fragmentación social en la que se ven inmersos. Puede inferirse que durante los últimos años, con el impacto de la pandemia sobre las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la población, especialmente los más jóvenes, se hayan agravado los guarismos relacionados con el desempeño escolar, la terminalidad educativa y la permanencia de las personas jóvenes en instituciones de educación superior.

Sobre la base de esta problemática, en las últimas décadas se han implementado en nuestro país diversas políticas públicas tendientes a promover la terminalidad educativa, tanto en el secundario como en el nivel superior. Una de las políticas más relevantes, por sus objetivos, envergadura, permanencia en el tiempo y resultados, ha sido la creación del “Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos” (PROGRESAR).

Este Programa fue creado en enero de 2014 mediante el Decreto 84/2014 con el objetivo de generar oportunidades de inclusión social y laboral a través de acciones integradas que permitieran capacitar a las juventudes de entre 18 y 24 años de edad en situación de vulnerabilidad (sin un trabajo formal y con ingresos familiares inferiores al salario mínimo, vital y móvil -posteriormente se amplió a tres salarios mínimos-) para que finalizaran la escolaridad obligatoria, pudiesen continuar con la educación superior y realizaran experiencias de formación y/o prácticas calificantes en ambientes de trabajo, de modo que lograsen, como consecuencia de ello, mayores posibilidades de inserción laboral.

Estas acciones contemplaron, desde su implementación, el otorgamiento de un ingreso mensual para cubrir los gastos adicionales que implica estudiar, reduciendo así la necesidad de tener que salir a trabajar y permitiendo que el grupo familiar no dejase de percibir un ingreso como la AUH o el Salario Familiar.

Asimismo, dado que el Programa en sus inicios tenía una mirada integral respecto de las personas jóvenes, y no se limitaba meramente a una ayuda económica para sostener la actividad educativa, se establecía que las personas beneficiarias cumplieran con una consulta de salud obligatoria anual. Para ello, además de los hospitales públicos, se dispusieron operativos en las diversas localidades donde las juventudes estudiantes podían acercarse y cumplir con el requisito de la consulta médica y tuvieran acceso a orientación vocacional en caso de demandarlo. Por ello, en su primera versión, el Programa era administrado por un Consejo interministerial en el que participaba más de un Ministerio.

Esta perspectiva ponía de manifiesto que el objetivo no solo era educativo sino de inclusión social integral, por lo que el Programa

contemplaba la creación de un sistema de tutorías para acompañar a las personas estudiantes que quisieran finalizar el ciclo y facilitaba el acceso a los Centros de Desarrollo Infantil dependientes del Ministerio de Desarrollo Social para que las personas beneficiarias que tenían niños y niñas a cargo (situación frecuente entre los grupos vulnerables) no se viesen impedidas de estudiar.

Sin embargo, con el cambio de gobierno en el año 2015, y la posterior promulgación del Decreto 90/2018, el Programa presentó fuertes modificaciones, tanto desde el punto cuantitativo, como desde la concepción de sus objetivos.

En términos cuantitativos se observó el doble proceso de caída en la cantidad de personas beneficiarias y el deterioro del monto percibido. Respecto al primer efecto, en 4 años la cantidad de personas beneficiarias se redujo un 42%, pasando de tener 724.439 jóvenes en el 2015 a 423.926 en 2019. Paralelamente, si se comparan los incrementos en los ingresos y la evolución de la inflación, se constata que en esos cuatro años el ajuste en el poder adquisitivo de las cuotas fue del 45% en el caso del nivel universitario y terciarios estratégicos, y de hasta un 62% en el caso de los niveles obligatorio y de formación profesional (“Las transformaciones del Programa PROGRESAR bajo la gestión Cambiemos”. CEPA, 2019 <https://n9.cl/oj6c5>).

En términos conceptuales, el Programa dejó de ser percibido como un derecho universal y quedó sujeto a los vaivenes de las disponibilidades presupuestarias. Pero más importante aún, se dejó de lado un abordaje integral de la problemática para dar lugar a la aparición de criterios selectivos y meritocráticos que, en los hechos, se tradujeron en mecanismos excluyentes para las personas jóvenes de menores ingresos.

En la práctica, estos cambios implicaron que el Programa pasara de estar en la órbita de la ANSES a depender del Ministerio de Educación, condicionando su financiamiento a las partidas presupuestarias que anualmente se fijaran para dicha dependencia.

Asimismo, se estableció una diferenciación de montos a percibir según el tipo de estudios a cursar. En la misma línea, se estableció una suma de dinero extra en reconocimiento a la excelencia académica. El requisito de aprobación del 75% de las materias (a diferencia de las 2 materias anuales del programa Progresar original), como también el establecimiento de montos diferenciales muy significativos en función del promedio académico, implicó una situación asimétrica para las personas jóvenes de menores ingresos, que son quienes presentan mayores dificultades para avanzar en los estudios y, por consiguiente, requieren mayor asistencia.

De esta manera, se diluyó la idea de un Programa que respaldase a las y los estudiantes mediante un derecho de carácter “general”, y se transformó en un sistema de estímulos económicos, que desconocía las particularidades de las personas beneficiarias, sus trayectorias y las condiciones sociales en las cuales se desenvolvían (“Análisis del Programa de Respaldo al Estudiante Argentino (Progresar) para la Educación Superior (2014-2020)”. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (México), vol. L, núm. 3°, 2020. Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. <https://n9.cl/yjd6>).

Con estas modificaciones también se eliminó el carácter colaborativo interministerial del Programa, dejando sin efecto obligaciones específicas relacionadas con salud, trabajo o la seguridad social y restringiendo el Progresar a la mera transferencia de dinero. De la misma manera, se eliminaron los sistemas de tutorías y la asistencia a través de los Centros de Desarrollo Infantil.

Por último, en lugar de 12 cuotas anuales, los pagos se redujeron a 10 cuotas y la renovación del beneficio dejó de ser automático, lo cual implicó no solo mayores dificultades para inscribirse anualmente, sino que además trajo aparejado demoras en los cobros, producto de la existencia de mayores tiempos para corroborar la información e iniciar cada nuevo ciclo de pagos.

En este marco, la segunda etapa de implementación del Progresar culminó con una caída en la cantidad de personas jóvenes beneficiarias, una reducción en los montos que se percibían y la adopción de una mirada meritocrática y selectiva que terminó incrementando las asimetrías e inequidades preexistentes dentro del sistema educativo.

Habiendo transcurrido poco tiempo desde el comienzo de la tercera etapa del Progresar, iniciada con el cambio de gestión en el gobierno nacional en el año 2019, se incluyeron algunas novedades en el plano de su formulación, orientadas a garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo.

En tal sentido, se incorporaron al Programa instituciones educativas de gestión privada con títulos oficiales que brindan un servicio gratuito o de contribución voluntaria y que estén localizadas en una zona donde no existe oferta equivalente en los establecimientos educativos de gestión estatal. Asimismo, se incluyeron en el Programa a grupos en condición de vulnerabilidad multidimensional: mujeres con hijos/as de hasta 18 años a cargo de un hogar monoparental, integrantes de comunidades indígenas, personas trans y personas con discapacidad para que estuviesen exentos del requisito de la edad. Por último, se generaron modificaciones para facilitar el acceso a los mecanismos de reclamo y se eliminaron los premios por rendimiento académico que habían caracterizado la concepción meritocrática del gobierno anterior.

Como resultado de estas acciones durante el 2021 se constató una notable mejoría no solo en los montos percibidos, sino principalmente en la cobertura del Programa alcanzando a más de ochocientos sesenta mil (860.000) personas jóvenes, y superando ampliamente los estándares de cobertura de finales de 2019.

Estas modificaciones se vieron complementadas finalmente por el Decreto 857/2021 publicado en diciembre de dicho año, el cual introdujo dos cambios trascendentales para el desarrollo del Programa. El primero de ellos implicó la posibilidad de que pudieran inscribirse personas de 16 y 17 años, ampliando así el universo de personas beneficiarias y dando respuesta a la necesidad de acompañar a las y los jóvenes pertenecientes a grupos etarios que presentan mayor tasa de abandono escolar, enfrentando a esta problemática desde el momento en que comienza a manifestarse. El segundo cambio se encuentra relacionado con la extensión en la cantidad de cuotas que se abonan durante el año, pasando a 12 cuotas mensuales (en lugar de 10), en la primera convocatoria del año y a 6 cuotas mensuales, en la segunda convocatoria.

Los cambios introducidos con el objeto de ampliar la cobertura del Programa se vieron acompañados por un incremento en las fuentes de financiamiento. El más significativo de dichos cambios se produjo a partir de la sanción de la Ley N° 27.605 de Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia, el cual en su artículo 7, inciso 3, estableció que un veinte por ciento (20 %) de lo recaudado por dicho Aporte sea destinado al PROGRESAR. Como resultado de ello, durante el mes de enero de 2022 se promulgó el Decreto Nro. 57/2022 creando el FONDO FIDUCIARIO PÚBLICO, el cual se conformó como un fideicomiso de administración y financiero para financiar líneas de acción orientadas a complementar y potenciar las acciones vigentes del Programa y para preservar y acrecentar los recursos generados por el Aporte Solidario, así como de otros recursos que pudieran integrar a futuro dicho FONDO FIDUCIARIO y que pudieran provenir del producido de sus operaciones, la renta, frutos e inversión de los bienes fideicomitidos, empréstitos, recursos del Tesoro Nacional que sean específicamente destinados al fondo fiduciario público u otros aportes, contribuciones, subsidios, legados o donaciones específicamente destinados a dicho fondo.

Lo descripto hasta aquí ha tenido como objetivo principal dar cuenta de la importancia que tiene para la Argentina generar condiciones de igualdad en el acceso y permanencia de las juventudes en el sistema educativo, el potencial que tiene el Progresar como política pública tendiente a garantizar ese derecho a la equidad educativa y los rasgos cambiantes que ha tenido este Programa con cada alteración en la conducción del Poder Ejecutivo nacional, lo cual ha traído aparejado

transformaciones en sus objetivos, alcances y modalidades de funcionamiento.

Desde esta perspectiva, la presente iniciativa procura cumplir con los siguientes objetivos:

- a) sancionar con fuerza de Ley un Programa cuya característica inclusiva, integral, federal y estratégica para el país pueda ser analizado, legitimado y consensuado por los distintos espacios políticos y representantes de cada una de las provincias en el Honorable Congreso de la Nación;
- b) generar un marco normativo que permita, por un lado, unificar las sucesivas disposiciones que han sido establecidas en cada uno de los Decretos mencionados (84/2014, 90/2018, 857/2021 y 57/2022) y, por otro, otorgarle un carácter jurídico estable, de modo tal que la alternancia en el Poder Ejecutivo nacional no afecte el desarrollo del Programa y, con ello, el desenvolvimiento educativo de las personas jóvenes en cada uno de los niveles educativos;
- c) sentar las bases para el desarrollo e implementación de un Programa que considere el acceso a la educación obligatoria, la educación superior y la formación profesional como un derecho universal, sustentado en un abordaje integral de la problemática y tendiente a ampliar sistemáticamente las condiciones de ingreso de aquellas personas cuyas vulnerabilidades multidimensionales se presentan hoy como una barrera insalvable para el normal desenvolvimiento de sus capacidades académicas y laborales.

Sobre la base de este último objetivo, el proyecto de Ley contempla en los artículos 4 y 12 una ampliación de la base de personas beneficiarias que hoy contempla la normativa vigente.

Por un lado, se prevé consolidar la baja en la edad requerida para ingresar al Programa, permitiendo que las personas jóvenes de entre 16 y 17 años también puedan recibir el beneficio. Esta medida obedece al hecho de que los problemas de repitencia y deserción escolar, tal como hemos señalado anteriormente, comienzan antes de los 18 años, siendo el nivel secundario una instancia crítica para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

De esta manera, se procura ofrecer de manera complementaria un estímulo económico y un acompañamiento integral, para que las y los adolescentes de dicho grupo etario puedan reconsiderar la salida del sistema educativo o, eventualmente, trabajar en lugar de estudiar. Asimismo, al considerar el Progresar desde una mirada universal, este estímulo permitirá reforzar los beneficios que actualmente pueda estar recibiendo la familia a través de la AUH u otras políticas públicas,

contribuyendo a generar un entorno socioeconómico más estable para el hogar y la carrera educativa de la persona estudiante, desalentando la búsqueda de otras opciones que puedan afectar la vocación de estudio de las y los jóvenes. Con este espíritu, el presente proyecto desestima la existencia incompatibilidades en la percepción de más de un beneficio por parte de las personas titulares del Progresar.

Resulta más efectivo para un Programa, cuyo objetivo es promover la terminalidad de los estudios obligatorios y el inicio y permanencia en los niveles educativos superiores, afrontar las inequidades sociales desde una edad más temprana, cuando comienzan a generarse problemas de abandono escolar, y no una vez que estas ya se potenciaron.

Por otro lado, en los mencionados artículos se contempla que para los grupos en condición de vulnerabilidad multidimensional (definición que podrá ser establecida, ampliada y redefinida por la Autoridad de Aplicación cuando ésta lo considere pertinente) que deseen culminar sus estudios secundarios, la edad requerida para ingresar al Programa se extienda hasta los treinta (30) años cumplidos a la fecha del cierre de la convocatoria a la beca. En el caso de la educación superior, dicho límite de edad podrá extenderse hasta los 35 años.

En el mismo sentido, el artículo 4 establece que para personas travestis, transexuales, transgénero e intersex, personas con discapacidad, personas integrantes de las comunidades indígenas y/o pertenecientes a pueblos originarios, personas refugiadas y personas residentes en áreas rurales dispersas no existan límites de edad para inscribirse y permanecer en el Programa. Estas incorporaciones continúan la perspectiva de beneficios que ya había sido desarrollada durante los últimos años, pero la amplía hacia otros grupos vulnerables que, por sus características y condicionalidades físicas, sociales, culturales, económicas y/o geográficas, requieren una extensión de la edad requerida para ingresar.

Por último, se prevé que para acceder al Programa las personas estudiantes que se encuentren cursando los estudios obligatorios deban estar inscriptas en una institución educativa pública o de gestión privada de cuota cero, o el equivalente que establezca la Autoridad de Aplicación. Para el caso del nivel superior se contempla que se encuentren cursando en una institución educativa pública o de gestión privada que emita títulos oficiales, brinde un servicio gratuito o contribución voluntaria, y esté localizada en una zona donde no exista oferta semejante en las instituciones educativas de gestión estatal o el equivalente que establezca la Autoridad de Aplicación.

Otro cambio sustancial respecto al funcionamiento actual del Programa es la posibilidad que prevé esta iniciativa de que la inscripción se pueda realizar durante todo el año, evitando que, por falta de información o

carencia de medios para hacerlo en el tiempo estipulado actualmente, una potencial persona beneficiaria quede excluida.

En el mismo sentido, en su artículo 11 se vuelve a introducir, tal como se contemplaba en la etapa inicial del Progresar, la posibilidad de que las personas beneficiarias que continúen cumpliendo con los requisitos establecidos, y no presenten causales para su exclusión o cesación, tengan una renovación automática de la inscripción al Programa hasta la finalización del nivel de estudios que se encuentren cursando.

Dado su abordaje integral, este proyecto procura reconocer al cuidado como una necesidad, como un trabajo y como un derecho. En tal sentido, incorpora en su artículo 7 que las personas que acrediten tener a su cargo, de manera única o compartida, el cuidado de personas menores de trece años; personas con discapacidad o personas adultas mayores con las que convivan y requieran asistencia específica, puedan solicitar a la Autoridad de Aplicación que arbitre los medios necesarios para garantizar el acceso a los servicios de cuidados de gestión estatal vigentes o los equivalentes que aquella establezca, así como la extensión del límite de edad para su permanencia en el Programa.

La sociedad argentina contemporánea exige un nuevo pacto que ponga en escena la centralidad de los cuidados como una dimensión clave del bienestar social. En este marco, entendemos que contemplar la situación de las personas que cuidan, una tarea no remunerada e históricamente a cargo de las mujeres, para el otorgamiento de la beca Progresar va en línea con el diseño de una estrategia integral hacia la organización más justa en torno de las tareas de cuidado en clave igualitaria, a la que tenemos que apuntar como dirigencia política.

Desde una misma perspectiva, y con la finalidad de garantizar un mayor acceso y permanencia en el Progresar, se contempla la creación de un Sistema de Tutores y Tutoras de Acompañamiento a la trayectoria educativa, que tendrá como objetivo principal brindar asistencia integral para que las personas beneficiarias que concurren al nivel obligatorio puedan culminar sus estudios y definir su futuro laboral y/o académico. Este Sistema se encontrará conformado por un equipo multidisciplinario de docentes, profesionales y estudiantes avanzados cuyo accionar deberá tener alcance nacional y una interacción permanente con las jurisdicciones provinciales, organismos públicos, organizaciones sociales e instituciones educativas nacionales, provinciales y municipales. Asimismo, la distribución de las tutoras y tutores en todo el territorio nacional será proporcional a la cantidad de becas entregadas en cada provincia.

Se contempla también la creación de un Comité Consultivo Federal, que tendrá como objetivo principal articular las distintas acciones en torno a la ejecución del Programa y las políticas vigentes en la materia,

incluyendo la definición de prioridades en la asignación de las becas para estudios superiores o formación profesional en cada provincia o región, tomando como referencia las particularidades educativas, laborales y productivas de cada una de ellas. Este Comité tendrá un carácter federal (con representantes de todas las provincias) e interministerial, de forma tal de abordar una implementación de manera integral, conjuntamente con otras políticas públicas que se estén llevando a cabo desde los distintos niveles de gobierno. Los miembros de este Comité se desempeñarán de forma ad-honorem y deberán desarrollar sus reuniones alternadamente en cada una de las seis regiones del país.

Con relación a las cuotas mensuales, el artículo 8 contempla que, si bien el monto a pagar será establecido por la Autoridad de Aplicación, éste no podrá ser inferior al otorgado durante el último mes de la convocatoria anterior.

Por su parte, el monto de las cuotas deberá ser actualizado de forma trimestral según lo establecido en el artículo 32 de la Ley N° 24.241, denominada “Ley de movilidad de las prestaciones de régimen previsional público”. La misma tiene como base de su cálculo un índice que combina en un 50% el crecimiento de la recaudación y en el otro 50%, el aumento de los salarios medido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte).

Dicha ley de ajuste actualmente contempla incrementos trimestrales para jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), asignaciones familiares, pensiones no contributivas, y pensión al adulto mayor.

Por último, se promueve que la cantidad de cuotas mensuales por año calendario vuelvan a ser 12 para la primera convocatoria y 6 en la segunda convocatoria.

Respecto a la desagregación de los montos pagados durante el año, artículo 9 prevé que a todas aquellas personas beneficiarias que cumplan con las condiciones de ingreso, y demás requisitos académicos establecidos por la Autoridad de Aplicación, se les liquide una suma igual al ochenta por ciento (80%), mientras que el veinte por ciento (20%) restante deberá ser abonado una vez que se acredite la asistencia a la institución educativa en el mes de diciembre. Por su parte, a las personas beneficiarias que se encuentren en un estadio avanzado de su educación superior (50% de la currícula aprobada), se les liquidará una suma igual al cien por ciento (100%).

Con relación al financiamiento, en el Capítulo IV se constituye el “Fondo Fiduciario Progresar”, el cual se conformará a partir de los recursos

provenientes del Aporte Solidario y Extraordinario (previstos en la Ley N° 27.605) con la finalidad de financiar líneas de acción orientadas a complementar y potenciar las acciones vigentes del Programa, complementando así las partidas presupuestarias asignadas anualmente por el Tesoro Nacional.

Este Fondo tendrá una duración de veinte (20) años, contados desde la fecha de su constitución mediante la celebración del correspondiente contrato de fideicomiso, y será administrado por un Comité Ejecutivo compuesto por el/la titular de la Autoridad de Aplicación, el/la titular de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), un/a representante del FONDO DE GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL y un/a representante del área administrativa de la Autoridad de Aplicación.

Se prevé que la presidencia y vicepresidencia del Comité sean ejercidas de manera rotativa por períodos semestrales, alternando dichas funciones entre el/la titular de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) y el/la titular de la Autoridad de Aplicación.

Para garantizar el acceso público a la información relacionada con el desarrollo del Programa, en el artículo 33 se incorpora la obligación de que la autoridad de aplicación elabore y difunda un informe anual que contenga toda la información referida a los objetivos y alcances del Programa, los requisitos actualizados para que accedan las personas pertenecientes a grupos con vulnerabilidades multidimensionales y datos estadísticos relacionados a la cantidad de solicitudes e inscripciones en cada uno de sus niveles, carreras y provincias. Asimismo, dicho informe deberá incluir los montos de las cuotas abonados y el presupuesto destinado para el funcionamiento. El documento deberá ser de acceso público y gratuito, estar disponible en el sitio web oficial del Programa y ser remitido a las respectivas Comisiones de Educación del Congreso Nacional.

De esta manera, la presente iniciativa procura que el Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos adquiera la fuerza, el consenso y la estabilidad jurídica propios de una Ley, con el objetivo de garantizar su reproducción en el tiempo, más allá de los cambios que pudieran producirse en las orientaciones políticas o ideológicas de los distintos gobiernos nacionales.

En el mismo sentido, brinda la oportunidad de consolidar al Progresar como un ejemplo de política pública integral y federal capaz de valorizar el rol fundamental que tiene la educación en la Argentina como herramienta para alcanzar la igualdad de oportunidades y un verdadero desarrollo nacional con inclusión y justicia social.

Por los argumentos expuestos, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.

María E. Catalfamo.- Anabel Fernández Sagasti.- Sergio N. Leavy.-
Claudia Ledesma Abdala de Zamora.- Matías D. Rodríguez.- José R.
Uñac.- Silvia Sapag.- Ana M. Ianni.- María E. Duré.- María T. M.
González.- Cristina López Valverde.- Nora del Valle Giménez.- María I.
Pilatti Vergara.- Juliana Di Tullio.- Sandra M. Mendoza.